

Panorama General de las Elecciones en la Costa



Foto: Paulino López

Campaña Electoral, Elecciones Regionales, Bilwi, febrero 1998.

Las Coordinadas Electorales

En cifras, una panorámica de las elecciones 1998 de la Costa Atlántica, fácilmente puede provocarnos el vértigo de las grandes magnitudes, concentradas a propósito de un espacio geográfico que representa el 47% del territorio nicaragüense (61,320 km²), pero justamente la región de menor densidad poblacional (4 habitantes por km²) con tan sólo el 6% de toda la población nacional (370,000 costeños), paradójicamente la de mayor potencial de recursos naturales a la vez que la más empobrecida y relegada. Simultáneamente se trata del rostro más olvidado, a la par que el de mayor riqueza multiétnica y pluriculturalidad del país.

Espacialmente, las elecciones incluyeron las dos regiones autónomas, la sur o RAAS y la norte o RAAN, comprendiendo 14 municipios (6 municipios en la RAAN y 8 en la RAAS), 151,141 electores con documento de votación (ciudadanos de 16 años en adelante), 335 comunidades indígenas extendidas en el litoral norte, disponiéndose de 683 juntas receptoras de votos (JRV), de las cuales 389 funcionaron en el Atlántico Norte y 294 en el Sur, ubicadas en 30 circunscripciones electorales (15 por cada región), para elegir a 90 concejales (45 por cada región) y que adicionalmente contó con unos 1,000 observadores nacionales e internacionales que vigilaron las elecciones.

El dispositivo de seguridad involucró a unos 4,000 efectivos entre miembros

de la policía nacional, de la policía electoral y del ejército. Las comunicaciones para la transmisión en regla de los resultados desde las comunidades costeñas al centro de computo del CSE fueron aseguradas con tecnología de punta, vía satélite, con equipos portátiles anunciados como los utilizados a inicios de la década en la guerra del Golfo Pérsico.

De esta forma, comunidades de Bocana de Paiwas, Kukra Hill, Waspán, Karawala, Tortuguero, Laguna de Perlas, etcétera, se vieron bruscamente incorporadas —por obra y gracia de las elecciones— al resto del país mediante una tecnología hasta ahora inédita en estos territorios del Caribe. Un poco antes, la telefonía regular y digital había sido inaugurada oficialmente por el

presidente Alemán, en diciembre del 97, en el triángulo minero: Rosita, Siuna y Bonanza.

Si a los 4,000 efectivos de seguridad sumamos los 1,000 observadores, obtenemos que cada junta electoral se encontró—como promedio—resguardada y vigilada por cerca de 7 personas, a lo que se deben sumar los fiscales de cada entidad política. De esta forma, al efectuarse los comicios el primero de marzo, fue muy notoria la presencia casi intimidante de muchos «extraños» alrededor de las juntas receptoras de votos.

Fuera de ello, la movilización de personal y distribución del material electoral (193,843 boletas) implicó el uso de tres helicópteros, 22 camiones, 13 pangas, 13 camionetas y cerca de 3,030 mulas, caballos o yeguas, para movilizar a las 10,928 personas que, entre fiscales, amanuenses y funcionarios del CSE, se desplegaron a los centros de votación electoral.

Pero también el gobierno movilizó cuantiosos recursos y una buena parte de su gabinete a la Costa Atlántica. Los funcionarios aparecieron «apermisados» temporalmente para atender la prioridad de campaña política trazada por el PLC. Al menos cuatro ministros estuvieron a tiempo completo y el presidente y su gabinete se desplazaron en constante gira por ambas regiones y sus municipios.

Luego de la visita a la Costa Atlántica que hiciera el ex dictador Somoza, esta era la segunda vez, en 35 años, que la máxima figura gubernamental hacía su aparición por el trópico húmedo de la Costa Caribe. Su paso por esta región fue alucinante y apabullante al compás de la larga cohorte de funcionarios y una caravana denominada «de la esperanza» de 113 vehículos que acompañó la comitiva presidencial el 10 de diciembre de 1997.

La coyuntura electoral de la Costa concentró la inauguración, por parte del gobierno, de una cantidad considerable de obras de infraestructura, comunicaciones, producción, financieras, sociales y educativas. La punta del iceberg político de esta situación lo constituyó la denuncia de todas las entidades políticas contra el PLC por el uso de bienes estatales para actividades proselitistas.

Todo el paquete electoral se valoró en unos 40 millones de córdobas (aproximadamente unos 4 millones de dólares), lo que tensionó el presupuesto nacional y, en distintos momentos, las relaciones entre el ejecutivo y el poder electoral.

Paradójicamente, mientras el erario público pasaba apuros para financiar las elecciones, en la Pequeña Isla del Maíz (Bluefields) fueron incautados, el 9 de diciembre de 1997, un total de 1,210 kilos de cocaína (una tonelada), cantidad suficiente como para financiar los comicios, constituyendo uno de los mayores cargamentos de droga interceptados por la policía nacional y un “guinness record” de trasiego local de esta mercancía. Desde luego, esto confirmó las suspicacias ya existentes acer-

ca de la posible influencia del narcotráfico en el proceso electoral.

Recientemente, el 4 de mayo de 1998, Nicaragua se vio sacudida por un nuevo escándalo, al descubrirse que un avión jet de uso presidencial fue robado en Estados Unidos y presumiblemente utilizado para el trasiego de droga. El avión jet, contando ya con matrícula nicaragüense, entró en funciones desde diciembre de 1997, justamente el momento en que el presidente Alemán y su gabinete intensificaban sus visitas a la Costa Atlántica.

En conjunto, las dos regiones autónomas participaron en la palestra política costeña con un total de 18 entidades (13 en la RAAS y 14 en la RAAN) de las cuales: 6 constituían partidos políticos nacionales encabezados por el bipartidismo PLC/FSLN, sólo una entidad se conformó y presentó como alianza (la Alianza Costeña), 4 entidades más comparecieron en calidad de partidos regionales, de los cuales sólo un partido estuvo presente en ambas regiones, el PIM, más 7 asociaciones por subscripción popular, siendo YATAMA la única coincidente en ambas regiones.



Todo el paquete electoral se valoró en unos 40 millones de córdobas.

Los resultados electorales oficiales fueron dados a conocer al final de la segunda semana de marzo por el CSE. El bipartidismo quedaba confirmado ampliamente al representar, los votos conjuntamente obtenidos por el PLC y el FSLN (62,673), un poco más del 75% del total de votos válidos (81,360). Un claro bipartidismo, si también se toma de referencia la posición de la denominada «tercera fuerza» en estas elecciones, YATAMA, que obtuvo un total de 7,117 en las dos regiones, es decir, cerca de un 9%, bastante lejos del primero y segundo lugar.

El hecho de mayores consecuencias políticas fue el alto abstencionismo registrado, que alcanzó al 51% de todo el electorado. Este alto porcentaje rebasó las expectativas sobre el abstencionismo esperado (de un 20 a un 30% entre abstencionismo técnico y político).

En resumen, de 151,141 ciudadanos inscritos, sólo ejercieron ese derecho unos 82,000. La relación costo-beneficio de estas elecciones no pudo resultar más dispareja: los gastos electorales, los de campaña, las inversiones de gobierno (regalías, viajes, promesas, etcétera) fueron comparativamente altos respecto al bajo respaldo electoral obtenido de la población.

Para el 4 de mayo de 1998 tomaban posesión del Consejo Regional del Atlántico Sur y del Norte los nuevos concejales, con claro predominio del PLC tanto en la planilla general de los consejos como en sus directivas. El FSLN y YATAMA decidieron retirarse hasta que no se logre una fórmula de mayor equilibrio en las directivas. Este conflicto dio visos de manifestaciones armadas al producirse, el 14 de mayo, en la comunidad de Sisín, río Wawa, a 30 kilómetros de Bilwi, un encuentro militar entre el ejército y rearmados de YATAMA.

De esta forma se inaugura una nueva etapa para la crítica gobernabilidad local, que tiene por telón de fondo el alto abstencionismo y apatía del electorado costeño, y en el horizonte, una autonomía cuyo futuro inmediato, al cerrar el milenio, es la más incierta que haya enfrentado este proyecto político en toda su corta existencia.



Cerca de diez meses de duración (mayo 1997-marzo 1998) conllevó en su conjunto el proceso electoral costeño. En mayo de 1997, oficialmente, el Consejo Supremo Electoral convocó a las elecciones en el Caribe. Pero el clímax electoral sólo se alcanzaría entre el mes de diciembre y la primera semana de marzo de 1998.

Este clímax se abriría entre dos coyunturas de conflicto y conmoción nacional: a) la primera, en enero, con la exclusión del FSLN en el nombramiento de los miembros de la directiva de la Asamblea Nacional para un nuevo período, situación que llevó a una crisis política y a una virtual parálisis del poder legislativo, y b) la segunda, el 4 de marzo, día inmediatamente posterior al cierre de los comicios, con la denuncia de Zoila América Narvaéz contra Daniel Ortega —su padrastro y máximo líder del FSLN— por abuso sexual. Este último escándalo estremecería lo suficiente al FSLN como para no permitirle entretenerse con su reciente derrota en el Atlántico. Ambas situaciones restarían atención nacional a la problemática costeña, al proceso electoral y a sus resultados.

A nivel internacional, dos hechos de relevancia —que contaron con una

sobredosis de publicidad— opacaron, en todo el mes de enero de 1998, las informaciones sobre las eventualidades políticas electorales de la Costa: la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba (21 de enero en la primera semana de marzo de 1998) y el denominado escándalo sexual Clinton-Lewinsky que rodeó al presidente norteamericano.

Noviembre y diciembre fueron los meses de ofensiva presidencial sobre la Costa Atlántica, y el ejecutivo, además de visitar 27 comunidades de Río Coco, se desplazó hacia las ciudades del triángulo minero (Bonanza, Rosita y Siuna), inaugurando en Bilwi el mejoramiento del camino que la une a Managua y anunciando la internacionalización del aeropuerto. En esta gira, el presidente Alemán visitó Bluefields, donde también prometió la habilitación de un camino que una esta ciudad y Nueva Guinea.

En relación a ello, una importante microcoyuntura política electoral fue la denuncia formal contra el PLC por el abuso de bienes estatales para proselitismo político partidario. Esta anómala situación empezó a evolucionar desde finales de diciembre de 1997, prolongándose durante todo el mes de enero y parte de febrero del año siguiente, constituyendo quizás el acontecimiento más relevante de toda la contienda electoral.

La denuncia fue interpuesta inicialmente por el Consejo Regional Electoral de la RAAS (finales de diciembre) y luego por el conjunto de los partidos políticos (segunda quincena de enero), tanto de la RAAS como en la RAAN. El CSE admitió la denuncia y sometió el caso a la procuraduría electoral, quien a la vez intercedió ante la Contraloría General de la República. De esta forma, esta denuncia se diluirá lentamente en la trama de inconsistencias y vacíos jurídico-institucionales del Esta-

do nicaragüense para sancionar con efectividad dichos actos.

Contrario a lo esperado, la apertura y cierre de campaña, así como el período postelectoral o de definición de resultados, no marcaron significativamente este proceso electoral. La campaña electoral inició oficialmente el 15 de enero y cerró mes y medio más tarde, el 25 de febrero. Los comicios electorales se celebraron, tal y como estaba previsto, el primero de marzo de 1998. Los acontecimientos para cada uno de estos momentos no estuvieron signados por situaciones críticas y más bien se desarrollaron sin mayor relevancia, casi rayanos a la apatía popular, con plazas y manifestaciones poco concurridas y una baja disposición política de la población. El alto abstencionismo en ciernes flotaba a más de 37 grados centígrados en el bochorno del trópico húmedo.

Este fuerte abstencionismo final fue un baño de agua fría que impuso silencio sobre las clásicas disputas de los contendientes, las acusaciones de fraude o las pretensiones de triunfalismo estrepitoso.

Una última microcoyuntura se escenificó entre finales de febrero y el 8 de marzo, teniendo de protagonistas al gobierno central y al Consejo de Ancianos, este último acusado por el primero de intentar separar la Costa Atlántica de Nicaragua. Para el Gobierno Central, el Consejo de Ancianos fraguó la separación en su IX Asamblea, llevada a cabo en Bilwi entre el 20 y 26 de febrero, donde contó con la presencia de unos 1000 representantes de 386 comunidades.

Independientemente del manejo político e informativo de esta situación por parte del gobierno, lo cierto es que el Consejo de Ancianos está exigiendo más respeto a las demandas de los costeños y asumiendo a la vez un papel más protagonista.

Pero éste fue un final y efímero capítulo. Luego de ello, un enrarecido ambiente de incertidumbre y depresión política quedaba como estela de las elecciones. Todo volvía a la normalidad en la Costa Atlántica y parsimoniosamente la enquistada pobreza, el relegamiento y el olvido volvían a tomar su lugar, excepto porque... dos meses

después de celebrados estos comicios, se presentaba un incidente militar entre el ejército y ex combatientes de YATAMA en el Atlántico Norte (14 de mayo) que alcanzó su climax con el alzamiento de más de mil indígenas que reclamaban compromisos incumplidos por parte del Gobierno, entre otras reivindicaciones.

Principales Actores

El reparto que se distribuyen las actuaciones significativas de la contienda electoral en estas elecciones 1998 de la Costa Atlántica fue integrado, tanto en sus expresiones nacionales como locales, por una amplia gama de entidades, que podemos categorizar de la siguiente forma:

- La institucionalidad democrática
- El poder ejecutivo o gobierno central
- Los partidos políticos y las entidades de suscripción popular
- La institucionalidad tradicional local
- Las entidades de la sociedad civil
- El electorado costeño

En más de un aspecto, las elecciones 1998 de la Costa Caribe pusieron a prueba la consistencia y capacidad institucional, tanto de los actores estatales como civiles, y en sus dimensiones nacional y local. A la vez, el proceso y sus resultados sacaron a flote problemáticas soterradas en la agenda política del país y de la Costa Atlántica.

La actuación político electoral de los distintos participantes en esta campaña certificó el uso continuado de prácticas anacrónicas y poco concordantes con una modernización política en orden a: atavismos como el caudillismo, la fusión Estado-partido, las regalías, la venalidad de funcionarios estatales, las promesas demagógicas, la inactualidad de los discursos que recurren de amparo a viejos fantasmas, ya sea amenazando con el retorno del



sandinismo o del somocismo, prometiéndolo —¡un siglo después de Zelaya!— la reincorporación plena de la Costa Atlántica a Nicaragua, o su opuesto, la separación y hasta el retorno del otrora reino miskito al viejo protectorado inglés.

Al parecer, la Costa Atlántica emerge ya no como el «gigante que despierta», sino como el nuevo espacio de «colonización española» para el entrante siglo XXI y cuyo Caballo de Troya es el censo agropecuario, la futura carretera Managua-Bilwi y la internacionalización del aeropuerto de la RAAN.

Lo nacional, lo global y lo étnico, el progreso, las viejas tradiciones y los límites ecológicos, no acaban de armonizarse en ese mosaico cultural, político y económico que representa en la actualidad la Costa Caribe nicaragüense.

Fuera del dominante bipartidismo PLC/FSLN, enojoso para algunos y para nadie una sorpresa, pero una realidad que se impuso desde el inicio, las grandes sorpresas vinieron inéditamente del propio electorado, del Consejo de Ancianos y del Partido Indígena Multiétnico (PIM).

El Binomio Estado-partido

El binomio Estado-partido se comportó con una alta agresividad política, aunada a una sistemática acción de incidencia sobre el electorado, lograda en un fórmula que combinó la presencia directa y constante del presidente y sus ministros en los distintos territorios de la Costa Atlántica, con una profusa realización de inversiones, buena parte de las mismas realizadas no con fondos propios sino con recursos de la cooperación internacional.

La conducta fue abusiva, y el presidente junto a su gabinete aparecían casi sin disfraz como PLC, en un entrecruzamiento de planos que nunca se tuvo la menor intención de ocultar.



IX Asamblea General convocada por el Consejo de Ancianos, Bilwi, 1998.

Foto: Virgilio Rivera

Una Débil Institucionalidad y un Incierto Estado de Derecho

En este terreno, la institucionalidad democrática y jurídica demostró sus vacíos e inconsistencias, pues evidenció que no estaba preparada para sancionar y corregir con efectividad y oportunidad hechos de esta naturaleza. El Consejo Supremo Electoral, Procuraduría Electoral y la Contraloría General de la República recibieron la denuncia, pero no tenían contemplados procedimientos y sanciones concretas y efectivas. Al final todo se resolvió en amonestaciones y llamados de atención.

Otro flanco de insuficiencias institucionales constante, lo constituyó la brecha entre lo acordado y normado en materia electoral y su ejecución. De esta forma se registraron tensiones presupuestarias y presiones mutuas entre los distintos poderes e instancias para asegurar las condiciones básicas de las elecciones.

El CSE presionó a la Asamblea Nacional, al poder Ejecutivo, a la policía y al ejército, a fin de garantizar las elecciones. A su vez, los partidos presionaron

al CSE para que actuara en correspondencia con su mandato y nuevamente el CSE presionó sobre la procuraduría electoral y la Contraloría General de la República.

La Desgastada Institucionalidad de la Autonomía

La institucionalidad formal de la autonomía, representada en los Consejos Regionales, lució fuertemente desgastada y fue objeto de una crítica en que coincidieron todos los sectores: las iglesias, el Consejo de Ancianos, líderes comunales, así como personalidades políticas y culturales del país.

La población se mostró desencantada y apática luego que, más de 10 años de autonomía no han constituido hasta el momento soluciones concretas a sus más agudos problemas. Estructuras y concejales ya no suscitan credibilidad. De fondo, esto pone en crisis el actual esquema formal de autonomía y el tipo de proyecto político correlacionado. Un proyecto debilitado a la vez por la gran inconsistencia jurídica de no contar la autonomía —una década después de su promulgación— con la aprobación de su reglamento—, como por no disponer del

respaldo de la voluntad política nacional y de ser traicionada por los mismos que estaban llamados a concretarla y defenderla: el liderazgo costeño.

El Consejo de Ancianos

El relevante papel jugado por el Consejo de Ancianos en estas elecciones no tiene precedentes en lo que va del proceso autonómico de la Costa Atlántica, que en la medida en que los Consejos Regionales se han opacado a consecuencia de sus pocas significativas y cada vez más cuestionables actuaciones, las tradicionales instancias de poder emergen con fuerza, llenando los vacíos de autoridad y poder creados por la débil y crítica situación de la institucionalidad aparejada a la autonomía. Transición incipiente pero interesante, que disloca el poder político concentrado hasta hace poco en los Consejos Regionales y que prelude un escenario político donde las comunidades y sus Consejos de Ancianos parecieran llamados a jugar, en el futuro inmediato, un papel de mayor peso.

La revitalización del Consejo de Ancianos puede considerarse como uno de los saldos más relevantes de estas elec-

ciones. El Atlántico estuvo pendiente de la señal que enviaría el Consejo de Ancianos. Algunos esperaron indicaciones de por quién votar, otros leyeron que la convocatoria del Consejo era al abstencionismo. Pero el Consejo de Ancianos demostró estatura política y no cayó en el error de suplir la responsabilidad y libertad de los electores, lo que no impidió a su vez su propia libertad para enarbolar un discurso de cuestionamiento a unas elecciones y a un *status quo* político que no ha sido favorable al pueblo costeño y en particular a las comunidades miskitas.

El Sorprendente Triunfo del PIM

En Corn Island, circunscripción número 9 de la RAAS, las entidades políticas regionales fueron dominantes en forma significativa sobre la nacionales. El PIM con un 27%, YATAMA con un 22% y Alianza Costeña con un 17% se alzaron con una contundente victoria sobre el bipartidismo. Pero también el PIM alcanzó relevancia electoral en la ciudad de Bluefields. Este fenómeno es inédito en lo que han sido los procesos electorales locales y la interrogante es si el hecho marca tendencias

futuras y alentadoras de las posibilidades regionales o si es un evento microlocalizado o coyuntural.

La Fantasmagórica Sociedad Civil Costeña

A excepción de lo actuado por el Consejo de Ancianos, lo más relevante de la sociedad civil costeña fueron sus pocas apariciones en escena y su baja incidencia en todo el proceso electoral. Los efectos de las campañas cívicas parece que a última hora fueron sobrevalorados por los ONG's promotores de las mismas. El «no» de la ciudadanía, expresado en el abstencionismo, se impuso sobre la lógica y formal exigencia del deber de votar. ¿Cómo explicar esta brecha entre visión de los ONGs y visión de la población?

La sociedad civil costeña o es demasiado débil aún, o pareció invisibilizarse en el proceso electoral, quizás en un exceso de cautela y prudencia política muy cercana al temor de verse arrasados por el torbellino político del bipartidismo.

No se dieron manifestaciones que indicaran la vitalidad de una sociedad civil en desarrollo, ni se conoció de reivindicaciones específicas representadas por organizaciones estables o coyunturales de grupos de pobladores urbanos o comunitarios, de productores, comerciantes, pescadores, mineros o jóvenes, aunque de parte de las organizaciones de mujeres sí se desplegó mucha actividad.

Estructuras tradicionales de poder como el Consejo de Ancianos retoman un espacio importante entre la crisis de la institucionalidad representada por los Consejos Regionales y la debilidad o inexistencia de la sociedad civil.



En Corn Island, las entidades políticas regionales dominaron en forma significativa a las nacionales.

El Electorado

Toda elección pareciera invisibilizar al electorado en favor de las entidades a elegir. La vistosidad de los líderes de partidos, sus confrontaciones, estilos y discursos, las consignas de los mismos, las campañas que realizan, todo ello se convierte en el centro de atención; y el electorado, disperso a la vez que anónimo en la individualidad de cada ciudadano, pasa sin más a ser el espectador de una contienda que al final decide, pero que al hacerlo enajena su protagonismo en una fuerza política determinada.

Los partidos montan el show electoral bajo el patrocinio de la institucionalidad democrática imperante y llaman a que se asista. En esta oportunidad, el show tuvo una escasa asistencia: el espectáculo no resultó atractivo. La tradicional vedette central del acto, la promesa, con todo y que se hizo acompañar de una cohorte de regalías y señas provocativas en la multitud de pequeñas obras, inauguraciones y visitas presidenciales no constituyó el señuelo seguro.

La promesa, pasada de libras, años y engaños, ya no resulta atractiva: una celulitis de desencanto la cubre de pies a cabeza, pero además se ha vuelto indecorosa. Bajo el patrocinio de viejas generaciones y de una clase política envejecida, sale a los escenarios con una desnudez cada vez más impúdica e intragable.

El electorado, con un record de abstencionismo, pasó a ser sin más el principal actor, recuperando de esta manera, con un contundente NO, su rol protagónico. El alto abstencionismo evidencia los límites que en adelante deberá someterse la clase política en su actuación, o bien preludiará una crisis de consecuencias y dimensiones imprevisibles en el futuro cercano.

Principales Temas en el Proceso Electoral Costeño

Sin pretender ser exhaustivo sobre los distintos tópicos que provocó en la opinión pública las elecciones costeñas, se reseñan a continuación algunos de los temas que mayor atención o tratamiento recibieron por parte de la prensa nacional:

- *El PLC y su cuestionable actuación como Estado-partido* en el uso de recursos del gobierno para su campaña política. La inquietud general que dejó esta actuación del PLC es la de si realmente ha evolucionado políticamente la sociedad nicaragüense, o si por el contrario se encuentra en un momento de regresión.

- *El proceso de cedulação en la Costa Atlántica* y la probabilidad de un alto abstencionismo técnico. Todo indica que el CSE y sus expresiones regionales hicieron lo posible por empadronar y entregar documentos, pero que al final se impusieron algunos problemas objetivos de dispersión geográfica de las comunidades y voluntad de los mismos ciudadanos, sin que ello excuse las limitaciones presupuestarias de que adolece el propio CSE y el país para cumplir con consecuencia con esta tarea.

- *La reincorporación de la Mosquitia a Nicaragua* el tema asume la posición gubernamental sobre la Costa Atlántica y el Estatuto de Autonomía. El gobierno y la campaña liberal plantearon la necesidad de una nueva ley de Autonomía, pero en todo el proceso electoral nunca se dio a conocer, por parte de los liberales o de las autoridades gubernamentales, en qué consistirá esta nueva ley.

- *Los recursos naturales de la Costa, su explotación y los beneficios que quedan para la región y las comunidades.* Tema neurálgico, en que contradictoriamente todos parecen de acuerdo en beneficiar directamente a las comunidades, pero donde a la vez todos se acusan de explotar estos recursos sin considerar a las comunidades que dicen defender. Líderes costeños acusados de traicionar a su propio pueblo, partidos nacionales señalados como los principales promotores de las concesiones madereras y pesqueras, al final todos simultáneamente culpables e inocentes, pero comulgando en una misma indignación patriótica y regional.

- *Presente y futuro de la reserva Bosawás:* parte del mismo tema, pero en específico se desarrolló un cuestionamiento y demanda al contrato realizado con SOLKARSA, la empresa asiática concesionaria de miles de hectáreas para la explotación del bosque. Los mayangnas aparecen como engañados por la astucia gubernamental y asiática. El MARENA y concejales regionales, como los principales cómplices de la rapiña extranjera. Felizmente, la Corte Suprema de Justicia dio lugar a un recurso de amparo contra la Compañía y mandó a cancelar sus operaciones. Sin embargo, organismos, como el Centro Humboldt, han denunciado maniobras de esta empresa que quiere regresar al país usando el nombre de otra Compañía.

- *La Autonomía: situación y perspectivas.* No hubo actor que no defendiera vehementemente la autonomía, incluidos los liberales. La cuestión de fondo continúa siendo la divergente concepción y perspectiva que todos tienen sobre la autonomía. PLC, FSLN, Consejo de Ancianos, YATAMA, las concepciones en cada uno de estos actores no pueden ser más dispares, menos explícitas y en algunos casos poco fundamen-

tadas. El proceso electoral reveló no sólo que se está lejos de alcanzar un consenso político regional y nacional sobre este tema, sino que la autonomía misma está en crisis y su futuro es incierto.

- *El problema del tráfico de drogas en la Costa Atlántica.* La captura en pleno proceso electoral de una tonelada de cocaína, dice bastante de la magnitud alcanzada por el tráfico de drogas en la Costa Atlántica. Pero más que las drogas, la población parece urgida por soluciones a la pobreza, la desocupación y la falta de servicios básicos. Hasta el momento no se han presentado evidencias de que el narcotráfico estuviera involucrado de manera directa o indirecta en el proceso electoral. El reciente escándalo del "narco-jet" abre un frente de dudas sobre la relación de este incidente con el proceso electoral.

- *El abstencionismo electoral.* Fue el epitafio de estas elecciones y quién sabe si de la misma autonomía. El altísimo abstencionismo desconcertó al país. Algunas personalidades políticas ven en ello el preludio de una fuerte crisis y caída de credibilidad en el sistema de representación política, cuyo más negativo impacto se hará sentir en las próximas elecciones nacionales. Sólo

el PLC, de espaldas a esta realidad, proclamó una «arrolladora victoria» en el Atlántico. El sintomático silencio posterior y la depresión política en que quedó sumida la Costa Atlántica revela, en alguna medida, el trauma político que este abstencionismo marcó para el sistema político nacional y regional.

- *La Violencia como parte de una cultura electoral.* Pese a que los temores sobre violencia y disturbios electorales constituyeron, tanto a nivel central como regional, una preocupación constante del Consejo Supremo Electoral, y de la excesiva relevancia que los medios de comunicación dieron a esta posibilidad, la realidad es que esta expectativa no se vio cumplida.

El trauma de los desórdenes y pérdida de boletas de las elecciones de 1996, llevó a la presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, a coordinar con la Policía y el Ejército —a lo largo del proceso electoral— la presencia necesaria de efectivos para garantizar la seguridad ciudadana y el orden en las JRV, tanto en el momento de ejercicio electoral como posteriormente.

Se debe tomar en cuenta que el déficit —todavía a finales de enero— de unos

40,000 documentos de acreditación de electores sin entregar, proyectaba una sombra de duda que podía comprometer la credibilidad y tranquilidad del proceso electoral.

En general, tanto la fase pre-electoral y de campaña, como la post-electoral inmediata, transcurrieron en una tranquilidad sólo perturbada por algunos incidentes puntuales, pero que no trascendieron ni empañaron las elecciones. Hasta se llegó a ver, una vez concluida las lides, un «sano ambiente de civismo y festividad».

Este casi bucólico final, no se compadece con lo que constituyó una propaganda permanente sobre la «amenaza» de que el proceso electoral se viera interrumpido por una violencia más o menos generalizada. En los umbrales de los comicios, la policía temía el desencadenamiento de acciones violentas en el triángulo minero, particularmente en Siuna y Rosita. Los menores y más vulgares incidentes delictivos fueron catalogados a grandes titulares de prensa como «Violencia en la Costa Atlántica», «Posibilidad de disturbios», etcétera.

- *Autonomía: un futuro incierto.* Lo que sí empezó a tomar forma y a remontar la apatía es el conflicto que suscitó, en la primera semana de mayo de 1998, la toma de posesión de los nuevos concejales y la elección de directiva del Consejo Regional, donde el PLC mantiene una línea política coherente de exclusión del resto de las fuerzas partidarias.

Para el 14 de mayo se produjo el primer incidente militar entre rearmados YATAMA y el Ejército. la falta de espacios políticos, de clima para alcanzar consensos, la impositiva forma de gobierno que perfila el PLC y la amenaza que todo ello conlleva sobre los derechos autonómicos de los costeños, parecen augurar una fase de conflictos y luchas en la región caribe para lo que resta del cierre del milenio.

